

El discurso de la guerra

SANTOS JULIÁ , EL PAÍS, 08/01/1995

La reapertura de un proceso contra los GAL obliga a plantear de nuevo uno de los problemas cruciales de nuestro tiempo: la capacidad del Estado para responder a sus enemigos por medio del recurso a la fuerza. Desde Weber es un lugar común repetir que el Estado es aquella comunidad humana que reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. ¿Puede esa comunidad recurrir a la lógica de la guerra, que es la lógica de la liquidación del enemigo, para defenderse de un ataque armado que procede del interior, de su propio territorio? Sus enemigos no se plantean esta duda; si declaran la guerra al Estado y utilizan todos los medios a su alcance, asesinando a personas inocentes y provocando atentados indiscriminados, es porque pretenden incitar al Estado a ese mismo tipo de acción violenta. Pero ¿puede el Estado hablar el mismo lenguaje que sus enemigos?

La respuesta natural, la que más nos pide el cuerpo y más nos acerca al estado de naturaleza, es decir que sí: ojo por ojo y, si es posible, dos o diez ojos por cada uno. Esta es la lógica de los regímenes despóticos tradicionales y de las dictaduras de nuestro tiempo. Entonces, como ha escrito Bobbio, es la guerra civil, en la que no hay más razón que la fuerza ni más regla que el exterminio. Guerra de la que tuvimos aquí, no hace mucho tiempo, una experiencia decisiva y que querrían reanudar, ETA y sus cómplices, una verdadera guerra civil en la que el Estado recurriera a los mismos métodos que los terroristas, situándose así con ellos en un plano de igualdad.

Pero la democracia es el más improbable resultado de una evolución natural. La democracia es producto de la voluntad de los ciudadanos de someter a la ley la violencia que el Estado concentra en sus manos y sin la que no hay sociedad posible. La democracia es la única forma de Estado en la que es imposible la guerra civil, pues toda guerra civil proclama con su sola presencia el fin del sometimiento de los titulares de la violencia al imperio de la ley. El Estado deja de ser democracia en el mismo momento en que acepta hallarse en guerra contra una parte de sus propios ciudadanos, aunque estos ciudadanos hayan declarado unilateralmente la guerra al Estado.

De ahí, el espanto que produce la idea de los GAL. No que haya sido una chapuza; no que de hacerlo, haya que hacerlo bien, con unidades de élite, sino, sencillamente, que no hay que hacerlo, que no se puede hacer. Sin duda, la Guardia Civil, la policía y el Ejército españoles han pagado un tremendo tributo a esa guerra que algunos les han declarado sin que ellos la buscaran, y será siempre un asombro para el historiador que unas fuerzas armadas que venían de una dictadura, y que atravesaron fuertes tensiones internas antes de aceptar la democracia, no hayan decidido tomarse la justicia por su mano y no nos hayan sumido a todos de nuevo en el estado de naturaleza.

Esta actitud contrasta sin embargo, con las declaraciones de algunos políticos que se embarcan de nuevo en el discurso de la guerra. Cuando se dice que los españoles pedían al Estado el uso de todos los medios a su alcance para acabar con el terrorismo o que los GAL no habrían existido sin ETA, se habla un lenguaje de legitimación de los GAL de idéntica naturaleza teórica y práctica que el de quienes legitiman los crímenes de ETA como expresión de la voluntad del pueblo vasco o como respuesta a la violencia del Estado. Y aun a costa de recordar cosas elementales, será preciso repetir serenamente que no; que los GAL no han existido porque los españoles lo hayan exigido o porque haya existido ETA, sino porque algunos se dejaron llevar por el lenguaje de la guerra que los enemigos del Estado pretendían imponer al conjunto de la sociedad y al mismo Estado. Que ese discurso no haya terminado por anegarnos es sólo una prueba de que la democracia, a pesar de todo, funciona.

Cuando todo está dicho

SANTOS JULIÁ, EL PAÍS, 23 de julio de 1995

Las bocas desatadas de los policías inculpados por su participación en acciones de los GAL y del que fuera secretario general de los socialistas vizcaínos no revelan más de lo que todo el mundo sospechaba, y unos pocos dijeron, desde que se produjeron los hechos: que los GAL no hubieran podido actuar sin fuertes conexiones con los aparatos del Estado y sin que miembros del Gobierno o de sus cercanías los conocieran o toleraran. Pretender que ahora nos enteramos de todo lo que se escondía bajo esa criminal aventura sería hipocresía; indignamos hoy enfáticamente por lo que barruntábamos ayer no es más que una muestra de mala conciencia, incapaz de modificar ni un ápice la responsabilidad en el pasado.

Pero de la misma manera que la sociedad vasca no saldrá del fondo de miseria moral en el que habitan muchos miles de sus ciudadanos hasta que no sea capaz de poner freno al terror de ETA, la sociedad española no puede seguir viviendo como si todavía le quedara algo sustancial por saber en relación con los GAL. Que el presidente del Gobierno tratara o no personalmente del asunto con Damborenea es, en este sentido, una cuestión menor. Su responsabilidad política, en éste como en otros casos, es obvia y se multiplica a medida que se desmoronan las tramas y los intereses en que algún día se confió irresponsablemente para que los implicados mantuvieran cerradas las bocas. Habrá tiempo de ocuparse del sentido de Estado de todos estos personajes, pero sea cual fuere el juicio que merezcan los móviles de estos inculpados para confesar lo que antes negaron, lo cierto es que todos los andamiajes se han derrumbado y el daño es irreparable.

Y como no queda más trinchera donde guarecerse, se invoca la palabra, como si sólo ella pudiera enderezar el torcido rumbo de las cosas. Palabra por palabra, se dice, la de un terrorista confeso, guiado por no se sabe qué propósitos y apoyado en oscuras complicidades, no puede prevalecer sobre la de un presidente democráticamente elegido. Pero ése es precisamente el fondo del problema: que Felipe González ya pronunció las palabras máximas en enero y fueron de tal entidad que, una vez dichas, le condenan

al silencio o a una ritual y vana repetición. No toleraré, ni consentí, ni organicé los GAL, dijo González, y es lógico que no tenga nada más que decir. Al pronunciar palabras tan solemnes, se ha quedado sin palabra, se ha condenado al silencio.

Porque, cuando todo está dicho y repetido, la palabra no importa. Diga ya lo que diga, González es un presidente amortizado y para crear efectos políticos, su palabra no vale más, ni menos, que la de Damborenea o la de cualquier otro de la criminal trama de los GAL. Sobre este asunto, como antes sobre Filesa y después sobre el Cesid, con sus tres negaciones, el presidente ha dicho todo lo que tenía que decir. El problema no es el silencio a que las negaciones le condenan sino el ensordecedor eco que su silencio encuentra en su partido: la desmayada voz de Cipriá Ciscar cada vez que toma la palabra constituye la prueba inapelable de que el PSOE tampoco tiene nada que decir.

Y aquí sí es donde nos jugamos el futuro. El PSOE lleva ya demasiado tiempo sin nombrar las cosas por su nombre, sin llamar al crimen, crimen, ni robo al robo, destrozando el lenguaje que le permitía entenderse con sus antiguos electores, que le seguirán volviendo la espalda mientras todo lo que tenga que decir se limite a la retórica de las tres negaciones y a la denuncia de la conspiración. Si el PSOE no encuentra una voz propia para encarar el triste desmoronamiento del proyecto socialdemócrata, el sistema político y tal vez la misma democracia sufrirá un daño duradero. De ahí la urgencia de que el partido socialista recupere la voz y rompa el círculo perverso en el que le ha encerrado una solidaridad entendida al modo de secta, repitiendo para consuelo interno palabras que nadie situado extramuros de la fortaleza pueda creer.

Por la seguridad del Estado

SANTOS JULIÁ 24/09/1995

Lo que se venía diciendo al oído, lo que todo el mundo, más que sospechar, daba por seguro, ha estallado por fin a la luz pública y la gente ha dicho: pufff..., ya está, se acabó. Ahora ya sabemos a ciencia cierta en qué consistía la conspiración y hasta hemos podido elevarla a la categoría de "concierto contra el Estado o una autoridad de éste", que es como define *conjura* el Diccionario de la Española. Sabemos además, lo que no es poco, quiénes eran los concertados y hasta podemos barruntar a qué tipo de sensibilidad se refieren cuando llaman *sensible* al material de que se valen para sus maquinaciones. Y sabemos, en fin, que cierto periodismo de investigación, que tanto se desvive por salvar a la democracia de un inminente peligro de muerte, se ha diluido en un periodismo de buzón, mero terminal de lo que los conjurados, querían hacer llegar poquito a poco, más que nada por no asustar, al público en general.

Bueno, pues ya está, eso era todo. O más exactamente, eso no era todo porque la conjura parió un chantaje. Y con el parto, al Gobierno le han regalado una hogaza de pan tierno y ahora le toca el turno de presentarse como sacrificado y responsable vigilante de la seguridad del Estado, si es que puede explicar convincentemente cómo fue posible que el emisario de los conjurados franqueara los estrictos controles de seguridad de La Moncloa y fuera a departir con el presidente. Pues la conjura ha venido a ser para sus presuntas víctimas menos secreta que el secreto de polichinela: de modo que recibían a Santaella; de modo que conjurados y víctimas han estado en largos tratos, con visiteos de unos y otros, con intermediarios de postín por medio.

Y todo por la seguridad del Estado. Hay tanta gente en España preocupada por la seguridad del Estado que entre todos van a acabar asfixiándolo. Preocupado el Cesid, que se ha pasado años grabando conversaciones privadas de gente pública por si algún amorío o negocio extraviado podía engendrar una carcoma en la mismísima base de las columnas del Estado; preocupada esa prensa que día a día, por servir a los grandes valores de la libertad, revela todo lo que cae en su buzón, venga de donde venga; preocupados los aprendices de brujo del Ministerio del Interior, que

no dudan en precipitarse al abismo cada vez que andan a la zaga de algún enemigo del Estado; insomne, en fin, más que preocupado, el presidente del Gobierno que recibe al agente de un banquero presunto estafador por ver si entre todos, sujetos activos y pasivos de la conjura, pueden evitar que se hunda el Estado.

Si todos ellos se hubieran preocupado un poco menos por la seguridad del Estado y se hubieran aplicado un poco más a cumplir la ley, la gente del común, que no tiene ocasión de mostrar tanto desvelo por la seguridad del Estado, no se vería ahora en el trance de decidir quién es más felón entre tanto conjurado y chantajeado... por la seguridad del Estado. Pero, en fin, como no han cumplido la ley los agentes del Cesid, ni el ladrón que robó a los agentes del Cesid, ni el chantajista que pagó al ladrón de los agentes del Cesid, ni, a lo que parece, los gobernantes que quisieron recuperar los papeles comprados al ladrón de los agentes del Cesid, la única salida es que alguno de los cuatro o todos juntos, con o sin conjura, nos digan de una buena vez qué dicen los dichosos papeles del Cesid.

Porque lo que parece haber pasado aquí es que unos señores, de acendradas virtudes castrenses, se han dedicado a guardar como oro en paño conversaciones y papeles que sirven ahora para alimentar conjuras y chantajes. Hecho el daño, bienvenida sea la revelación de esos altos secretos de Estado, porque como el Estado tenga que seguir basando su seguridad en el mantenimiento del secreto de unos secretos que se ofrecen al mejor postor en la plaza pública, aviados estamos. Aire, pues, que se lleve el viento los papeles y que sea lo que Dios quiera de la seguridad del Estado.

Contra el olvido

SANTOS JULIÁ 22/10/1995

¿Dónde estábamos, qué decíamos desde 1983 a 1987, cuando los GAL desplegaron sus prácticas de guerra sucia contra ETA? Sabemos dónde estamos y qué decimos ahora, tantos años después, pero no es nada seguro que una parte de la indignación moral levantada por las progresivas revelaciones sobre los GAL no sea más que una gigantesca impostura por no haber reaccionado entonces con la energía que, según lo percibimos ahora, aquellos asesinatos habrían exigido.

Porque saber, sabíamos mucho más de lo que ahora estamos dispuestos a reconocer. No hay más que ir a las hemerotecas y revisar algunos periódicos para caer en la cuenta de que el nivel de información que se produjo ya entonces sobre los crímenes de los GAL era más que suficiente para haber levantado oleadas de indignación moral y exigencias de responsabilidad política. No fue así; definitivamente, no fue así, y aunque resulte muy rentable para nuestra buena conciencia extremar hoy el acento y buscar los más enfáticos adjetivos para calificar aquellos hechos, esas muestras de horror y esas manifestaciones de rechazo no palian la actitud comprensiva, si no abiertamente cómplice, que los españoles mostramos mayoritariamente en los años en que aquellos crímenes, sabiéndolo nosotros, se cometían.

No se trata de diluir en una especie de culpa universal la responsabilidad individual, intransferible, de quienes diseñaron aquella estrategia de guerra sucia, como pretenden quienes atribuyen a un público supuestamente entusiasta las iniciativas de los gobernantes. Se trata, simplemente, de recordar que la calidad de las reacciones éticas y la eficacia de las políticas depende del momento en que se producen. No es lo mismo éticamente ni tiene políticamente idénticos efectos resistir al crimen en el momento exacto en que se comete que sumarse, rasgándose las vestiduras, al coro de los acusadores cuando, desde el mismo aparato de Estado, los tribunales se aplican a buscar, encausar y juzgar a los presuntos culpables. Nuestras actitudes colectivas de los años ochenta no se modifican ni un ápice por las oleadas de indignación que hoy seamos capaces de levantar.

Por eso, la decisión del Senado de proyectar los focos sobre esa página negra de nuestro reciente pasado puede culminar en la más grotesca maniobra de hipocresía colectiva a la que hemos asistido desde la transición o, por el contrario, enfrentar a la totalidad de la clase política, pero también a los líderes de opinión y a las élites sociales, a su memoria personal, a lo que eran y a lo que decían de ETA, del Gobierno y de los GAL en el momento en que se cometían los crímenes. No sería improcedente, sino muy higiénico que la comisión senatorial no se limitara a poner patas arriba al Estado, sino que, lanzada a recordar, hurgara también en la sociedad y llamara a declarar, junto a aquel dirigente de la oposición que, si no jaleaba entonces al Gobierno, guardaba prudente silencio y estalla ahora de indignación, al líder de opinión que desde su periódico pedía poco menos que la ocupación militar del País Vasco y exige hoy airado la aniquilación del Gobierno; o que preguntara a aquel juez o a este intelectual, convertidos en conciencia moral del país, cómo pudieron aceptar, sabiendo lo que sabían, los premios y acudir solícitos a las llamadas del Gobierno.

Se dice que la transición fue posible porque descendió sobre la sociedad española una especie de nube del olvido en la que todo el mundo recuperó la inocencia de los orígenes. Pues bien, como ya hemos perdido definitivamente la inocencia, sería muy sano para la memoria colectiva que, mientras el Congreso concede al Tribunal Supremo todos los suplicatorios necesarios para el *esclarecimiento penal* de aquellos crímenes, el Senado tuviera el coraje ético y los arrestos políticos suficientes para plantear el *debate político* sobre los GAL y sacar a la luz dónde estaba cada cual, qué hacía y qué decía mientras se abría la guerra sucia contra ETA.